



# Nuevos cambios en la economía española

Danilo TRELLES

Las recientes declaraciones del ministro de España, Miguel Boyer ante el congreso de los diputados, significan un reconocimiento expresivo de que los planes trazados para la reactivación económica del país han fracasado y que es necesario una urgente corrección de líneas, si no se quiere enfrentar un cuadro verdaderamente tenebroso a corto plazo.

Los alegres cálculos del ministro se basaban en unas predicciones que, al no cumplirse, han terminado por actuar como freno en todo el proceso. El aumento del PIB, calculado por el propio gobierno en un 3 por ciento para 1985, descenderá a menos del dos por ciento, lo que trae aparejado como perspectiva, un crecimiento del desempleo que puede llegar a fin de año a unos tres millones de personas.

Las razones de este problema son muy simples. Las exportaciones que en 1984, habían crecido un 15 por ciento en lugar del 8.5 por ciento fijado como objetivo, dieron un cuadro ilusorio de la situación, ya que a partir de entonces comenzaron a caer aceleradamente. El saldo es negativo en un 2.4 por ciento en los dos primeros meses del año, contra un aumento del 34.1 por ciento en el mismo período de 1984.

Las causas de este brusco descenso se influyen en la recesión de la economía norteamericana y sus consecuencias se incrementan por el hecho de que en 1984, su contribución al crecimiento del PIB fue del 3 por ciento que hubiera sido en consecuencia negativo en uno por ciento, sin ese aporte.

Las otras caras del cuadro macroeconómico estaban dadas por la caída del consumo privado —del 1 por ciento en lugar del previsto aumento del 0.5 por ciento— y el del movimiento de la inversión que cayó 3.5 por ciento en lugar del objetivo que era subir un 4.5 por ciento.

Las razones consisten en el primer caso, en que las diferencias entre los aumentos reales de salarios previstos en los acuerdos de empleo —en los que el gobierno ha tenido una política fluctuante— y la inflación, no permiten un estímulo del consumo.

En el segundo caso, porque los factores económicos externos —altas tasas de interés del capital en los Estados Unidos— siguen actuando como un freno de la expansión económica, no sólo en España sino en toda Europa.

Entretanto la política socialista en el terreno económico, ha sido oscilante. Los planes de Felipe González, en la primera etapa se nutrían de una vaga idea de la expansión económica basada en la modernización de la industria. "La política de los anteriores gobiernos —afirmaba— de rebajar sistemáticamente los costos de la mano de obra, reducir los salarios reales o las plantillas y transferir los costos de ineficacia de los aparatos productivos regresivos hacia los dinámicos, no ha logrado estimular la inversión y ha tenido un efecto depresivo sobre la demanda, presentando el pavoroso blanco de más de 2 millones de desempleados, a un ritmo de mil

diarios.... La creación de plazas de trabajo es el principal reto al que ha de enfrentarse la sociedad española durante los próximos años. Por ello, el empleo es el objetivo prioritario del programa".

Cuando Miguel Boyer inicia su gestión como ministro de Economía, el programa de reactivación económica queda desplazado por un plan de estabilización cuyo principal objetivo es la lucha contra la inflación. El problema del desempleo, quedará para otra etapa.

Pero en la etapa siguiente las diferencias entre los precios y la capacidad de consumo interno se acentúan, con caída de éste en 1 por ciento. El cuadro ilusorio brindado por el crecimiento de las exportaciones en 1984, se ha desvanecido y el desencanto obliga una vez más a cambios drásticos.

Las medidas propuestas por Boyer apuntan ahora a un incremento de la demanda interna mediante una disminución de las retenciones fiscales y un crecimiento de la inversión, sobre todo en el sector de la construcción —sector generador de empleo— mediante una desgravación de hasta el 17 por ciento de la inversión realizada en vivienda.

Boyer se propone además estimular el volumen de las inversiones extranjeras mediante una liberación de las normas legales actualmente en vigor. Estas medidas incluyen concesiones para la adquisición de inmuebles con un valor de hasta 100 millones de pesetas.

Aunque no se incluye en este paquete de medidas, debería mencionarse por su incidencia sobre el consumo, la intención anunciada por Boyer de reducción de las pensiones en un 17 por ciento, medida que ha levantado una inmensa resistencia en las centrales obreras y que ha decidido a la organización socialista UGT a romper su línea de alianza tácita con el gobierno, ya que se encontraba enfrentada al riesgo de continuar perdiendo credibilidad, luego de su decisión de prestar apoyo al Acuerdo Económico y Social (AES).

Las medidas propuestas ahora por Boyer para resolver la crisis, se inscriben cada vez más en las formas clásicas del neo-liberalismo y se inspiran cada vez menos en cualquier principio socialista, sobre todo si se confirma esa tendencia de desprender a las clases más desposeídas, incrementando las facilidades de la inversión extranjera mediante un régimen de desgravaciones fiscales e incentivos oficiales, en absoluto contraste con las reivindicaciones de justicia social y desarrollo de las fuentes de trabajo, con su justa retribución, que constituyeron el centro de la campaña electoral del PSOE en las últimas elecciones. Las fórmulas propuestas por Felipe González y su ministro de Economía Miguel Boyer, se confunden peligrosamente con las sugeridas por la 'reaganomics' y las huestes de Fraga Iribarne, que son sus más apasionados defensores en España, con lo cual es probable que más de uno comience a preocuparse, interrogándose, si no habrá confundido las papeletas en el momento de depositar su voto en las urnas.